

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO VEINTINUEVE ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. - ORAL
SECCIÓN SEGUNDA

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

PROCESO:	11001 33 35 029 2020 00371 00
DEMANDANTE:	AMADEO DE JESUS RODRÍGUEZ CASTILLA
DEMANDADO:	COLPENSIONES
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Se procede a resolver sobre el incidente de liquidación de Sentencia propuesto por la apoderada judicial de la parte actora, en relación con la sentencia de fecha 14 de junio de 2022, proferida dentro del presente proceso y confirmada con sentencia de fecha 9 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Sobre la materia en particular, dispone el artículo 193 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA):

***“Artículo 193. Condenas en abstracto.** Las condenas al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios y otros semejantes, impuestas en auto o sentencia, cuando su cuantía no hubiere sido establecida en el proceso, se harán en forma genérica, señalando las bases con arreglo a las cuales se hará la liquidación incidental, en los términos previstos en este Código y en el Código de Procedimiento Civil.*

***Cuando la condena se haga en abstracto se liquidará por incidente que deberá promover el interesado,** mediante escrito que contenga la liquidación motivada y especificada de su cuantía, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia o al de la fecha de la notificación del auto de obediencia al superior, según fuere el caso. Vencido dicho término caducará el derecho y el juez rechazará de plano la liquidación extemporánea. Dicho auto es susceptible del recurso de apelación”.*

De acuerdo con lo dispuesto en la norma en cita, se debe establecer si la decisión objeto de la presente petición se puede considerar como una condena en abstracto, para ello es

necesario traer a colación el pronunciamiento hecho por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, en sentencia del 12 de mayo de 2014, proceso: 25000-23-25-000-2007-00435-02 (1153-12):

“Sobre este aspecto resulta ilustrativo el pronunciamiento efectuado por la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación el 26 de septiembre de 1990, al absolver una consulta formulada por el Ministro de Hacienda. Veamos:

"Las condenas se pronuncian in genere o se dictan en concreto. Las primeras obedecen al hecho de que en el proceso, aunque aparece acreditada la existencia del perjuicio o daño, no se halla probada la cuantía o monto de la indemnización correspondiente. En este tipo de condenas se da una insuficiencia probatoria sobre el último extremo, que deberá suplirse durante el trámite posterior.

Las condenas en concreto pueden asumir dos formas, igualmente válidas, así : a)- La sentencia fija un monto determinado por concepto de perjuicios; por ejemplo, condena a pagar \$ 1 '000.000.00 ; y b)- La sentencia no fija suma determinada, pero la hace determinable, bien porque en la misma se dan en forma precisa o inequívoca los factores para esa determinación, de tal manera que su aplicación no requiere de un procedimiento judicial subsiguiente, con debate probatorio para el efecto; o bien, porque los elementos para esa determinación están fijados en la Ley, tal como sucede con los salarios y prestaciones dejados de devengar por un funcionario o 8 Folio 205 cuaderno No. 2. 9 C.P. Jaime Paredes Tamayo, radicación No. 369. empleado público durante el tiempo que estuvo por fuera del servicio.

En otras palabras, la Administración cumple las sentencias, las ejecuta dice la norma (artículo 176 del C.C.A.)¹, una vez estén ejecutoriadas (artículo 174 ibídem). Pero ese cumplimiento se entiende sólo cuando contengan condena en concreto, en las dos hipótesis explicadas; o cuando se haya cumplido el procedimiento de liquidación y el auto correspondiente esté ejecutoriado (Condena in genere).

En estos eventos, como lo dispone el mismo código administrativo, la administración deberá adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento y es aquí donde la administración para acatar la sentencia deberá hacer las operaciones aritméticas, aplicando los factores que no requieren prueba por ser de orden legal, para determinar la cuantía de la indemnización.

¹ Art. 176. Ejecución. Las autoridades a quienes corresponda la ejecución de una sentencia dictarán, dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, la resolución correspondiente, en la cual se adoptarán las medidas necesarias para su cumplimiento.

En materia laboral no procede, en principio, la condena "in abstracto", toda vez que en la Ley y en los reglamentos están dados los elementos para su liquidación. Sería procedimiento inútil, dilatorio e ilegal que tuviera que hacerse condena "in genere", para luego, por una liquidación incidental dentro del proceso mismo, determinar el valor de una condena por salarios, prestaciones y demás derechos sociales, cuando estos presupuestos están forzosa e ineludiblemente señalados por la Ley.

No puede olvidarse que la presunción de derecho de conocimiento de la ley, se aplica tanto a los particulares como a los funcionarios públicos.

(...)

Con fundamento en lo expuesto la Sala responde:

1o. - El Código Contencioso Administrativo comprende dos clases de condenas, una genérica y otra específica. La primera requiere surtir un incidente para determinar la cuantía de la obligación. La segunda no necesita de incidente porque esa cuantía es determinada o determinable en la ley o en los reglamentos con fundamento en la sentencia.

2o.- **Las sentencias que profiera la jurisdicción contencioso administrativa, en materia laboral, implican condenas específicas porque el valor de las mismas está determinado en las sentencias o se deduce de la sentencia en relación con las leyes o reglamentos.**

En estos casos por lo mismo no hay necesidad de proferir autos que liquiden el valor de las mismas. Las condenas que no son líquidas, pero sí liquidables, de conformidad con el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo se cuantifican mediante acto administrativo".

A partir del anterior referente jurisprudencial resulta claro que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se equivocó al declarar probada la inexistencia de título ejecutivo y terminar el proceso, con fundamento en una premisa falsa, cual es que la sentencia objeto de ejecución contiene una condena en abstracto que necesariamente requería un trámite incidental de liquidación.

Basta con revisar el texto de los numerales 2° y 3° de la parte resolutive de la sentencia de fecha 26 de agosto de 1999¹⁰, mediante la cual la Sección Segunda Subsección "B" de esta Corporación declaró la nulidad del acto que había decidido la

insubsistencia del nombramiento de la actora en el cargo de Auditor III ante la Agencia de Compras de la Fuerza Aérea Colombiana con sede en Fort Lauderdale, para concluir que estamos frente a una condena en concreto liquidable con fundamento en la ley, los reglamentos y en la información que reposa en la propia entidad demandada:

"2° La Contraloría General de la República reintegrará a la señora HERMINIA ISABEL BITAR DE MONTES, a un empleo de igual o superior categoría al que ejercía en el momento de la desvinculación, y le reconocerá y pagará los salarios y prestaciones dejados de devengar entre el día 27 de agosto de 1987 y la fecha en que sea reintegrada al cargo, emolumentos que deberán ser cancelados en dólares americanos, con los ajustes ordenados anualmente, entendiéndose para todos los efectos legales que no ha existido solución de continuidad durante dicho interregno.

3° Las sumas que se paguen en favor de la señora HERMINIA ISABEL BITAR DE MONTES, se actualizarán en la forma como se indica en esta providencia, aplicando para ello la siguiente fórmula: $R = R_h \times \frac{\text{Índice final}}{\text{Índice Inicial}}$. La entidad demandada dará cumplimiento al fallo en los términos del artículo 176 del C.C.A., con observación de lo previsto en el artículo 177 ibídem"

Conforme con lo anterior, se tiene que las providencias dictadas en materia laboral al interior de la jurisdicción contencioso administrativa, no son abstractas, pues los reconocimientos de tipo salarial y prestacional son perfectamente determinables, ya que en las sentencias se especifican los tiempos a reconocer, los factores a tener en cuenta, las prestaciones sociales reconocidas, etc.

En el presente caso, en la Sentencia de fecha 14 de junio de 2022, proferida por este despacho se dispuso en la parte resolutive:

***"PRIMERO:** DECLARAR la nulidad de las Resoluciones Nros. SUB-91684 de 2020, SUB-129643 de 2020 y DPE_10832 de 2020, expedidas por la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES-, por medio de la cual, se negó la reliquidación de la pensión de vejez, de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente providencia.*

SEGUNDO:** Como consecuencia de la anterior declaratoria y a título de restablecimiento del derecho, se **ORDENA a COLPENSIONES reconocer y pagar al señor AMADEO DE JESÚS RODRÍGUEZ CASTILLA, el reajuste de la pensión de vejez reconocida a su favor, la cual deberá ser calculada en cuantía del 75% del ingreso base de liquidación de los últimos 10 años de servicio, pagando las

diferencias que surjan en las mesadas no prescritas, a partir del 2 de diciembre de 2016.

(...)"

Decisión que fue confirmada parcialmente por el Tribunal Contencioso Administrativo en sentencia de segunda instancia emitida el 9 de noviembre de 2022, en los siguientes términos:

"Primero.- CONFIRMARSE PARCIALMENTE la Sentencia escrita proferida por el Juzgado Veintinueve (29) Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá D.C. – Sección Segunda el catorce (14) de junio de dos mil veintidós (2022), que accedió a las súplicas de la demanda dentro de la acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho incoado por el señor Amadeo de Jesús Rodríguez Castilla contra la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, por las razones expuesta en la parte motiva de esta providencia, se adiciona el numeral Segundo en el siguiente sentido:

"De resultar la nueva liquidación inferior al valor que se le cancela al demandante, deberá conservarse éste, en caso que le resulte más beneficiosa".

Conforme con lo anterior, para el despacho la sentencia cuya liquidación se pretende mediante incidente, contiene una condena en concreto y no en abstracto, ya que cuenta con los datos necesarios para hacer la determinación pertinente, mediante operaciones aritméticas; pues en ella se indicó que el reajuste de la liquidación de la pensión de vejez, deberá ser calculada en cuantía del 75% del ingreso base de liquidación de los últimos 10 años de servicio, pagando las diferencias que surjan en las mesadas no prescritas, a partir del 2 de diciembre de 2016.

Por lo anterior deberá rechazarse por improcedente el incidente propuesto, pues no tiene ningún sentido la liquidación incidental, por cuanto en la sentencia se estableció la forma en la cual se debe efectuar la reliquidación de la pensión de vejez, y la información necesaria para su liquidación aparece en la ley y en las certificaciones expedidas por la entidad demandada, información que reposa en el expediente y que fue parte del acervo probatorio, al momento de tomar la decisión.

Por último, se aclara a la parte actora que si lo que pretende es el cumplimiento de la sentencia emitida por este Despacho, deberá realizar el trámite correspondiente ante la entidad demandada, o en su defecto iniciar el correspondiente proceso ejecutivo, si a ello hay lugar, conforme a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso

Administrativo y el art. 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Por lo expuesto, **JUZGADO VEINTINUEVE (29) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C., SECCIÓN SEGUNDA,**

RESUELVE:

RECHAZAR por **IMPROCEDENTE** el **Incidente de Liquidación en Concreto**, propuesto por la apoderada judicial de la parte demandante, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



ENRIQUE ARCOS ALVEAR
JUEZ

JNE

**JUZGADO VEINTINUEVE ADMINISTRATIVO
ORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
SECCIÓN SEGUNDA**

Por anotación en ESTADO notifico a las partes la providencia anterior

Hoy 17 de febrero de 2023 a las 8:00 a.m.

Partes:	Dirección electrónica:
Parte Demandante:	brc.1950@gmail.com
Parte Demandada:	notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co amoreno.conciliatus@gmail.com
Ministerio Público: Procuraduría 191 Judicial I Para Asuntos Administrativos	procjudadm191@procuraduria.gov.co